

Tirada: 165.194	EL MUNDO	Superficie: 764 cm ²
Difusión: 112.857		Ocupación: 87.35%
(O.J.D)	Nacional	Diaria
Audiencia: 394.999	General	Valor: 27.256,63 €
Ref: 10304177	2ª Edición	11/07/2018
		Página: 22



Ofensiva contra el hachazo fiscal

● Los dirigentes empresariales advierten al propio Sánchez en Moncloa de que la subida de impuestos perjudica al empleo y pone en riesgo el incremento salarial ● La banca denuncia que se les cobre más tributos que a otros sectores

CARLOS SEGOVIA / ISABEL MUNERA
CÉSAR URRUTIA MADRID

Las organizaciones empresariales y la banca han decidido pasar a la ofensiva y formalizaron ayer su primer enfrentamiento político con el Gobierno de Pedro Sánchez por el hachazo fiscal que proyecta. «Si a las empresas les suben los impuestos y se les destopan las cotizaciones, no podrán subir salarios. El capital de una empresa no da más de sí», asegura a EL MUNDO el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, tras una reunión en Moncloa. Éste asegura que la patronal va a colaborar con lealtad con el Gobierno, pero dejando claros sus planteamientos.

Garamendi y el presidente de la CEOE, Juan Rosell, advirtieron ayer al propio Sánchez en su sede monclovita de los «riesgos económicos» que implica la subida de impuestos a las empresas. Ambos plantearon al presidente del Gobierno la pérdida de competitividad que va a suponer para las empresas españolas aumentarles la tributación, puesto que pagan ya más cotizaciones a la Seguridad Social que en países del entorno. Apenas una semana después de que se suscribiera el pacto salarial entre los interlocutores sociales, la recomendación de subir sueldos un 2% o más queda en el aire: «Todo lo que sea subir los costes empresariales, puede hacer fracasar el acuerdo de salarios (...) si las empresas tienen que pagar, por un lado, no podrán pagar por otro. Pedimos mucho estudio y tranquilidad en el aumento de las cargas fiscales, ya que afectarían de forma modular a las empresas», afirmó Garamendi.

Para los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, que también participaron en la reunión de agentes sociales en Moncloa, los planes del Gobierno a nivel impositivo no pueden servir «de excusa» a las organizaciones empresariales para no cumplir el acuerdo sobre salarios que se acaba de firmar. «No es bueno ligar una cosa sobre la otra, las empresas tienen margen para incrementar los salarios. Desde la firma del preacuerdo se han desbloqueado muchos convenios con subidas cercanas del 3%. Este país tiene margen para recaudar más sobre el impuesto de sociedades», subrayó Sordo.

Para Álvarez, «el acuerdo hay que cumplirlo y ninguna decisión política va a hacer que se rompa. El Gobierno está situando la política impositiva como un elemento de redistribución de la riqueza en nuestro país y nosotros estamos de acuerdo. Este es un país en el que se pagan pocos impuestos respecto al entorno europeo y hay empresas como las tecnológicas que utilizan mecanismos de manera descarada para pagar menos». Por su parte Rosell señaló que



Los presidentes de Cepyme y de la CEOE, Antonio Garamendi (izqda.) y Juan Rosell, ayer, en una rueda de prensa en Moncloa. EFE

QUEJAS EN TODOS LOS SECTORES

Congreso de DigitalEs.

Las operadoras de telecomunicaciones criticaron en la sesión inaugural del congreso DigitalEs Summit el plan de subir impuestos del Gobierno. El presidente de la patronal tecnológica DigitalEs, Eduardo Serra, afirmó: «Si estas empresas pagan muchos impuestos, dedicarán menos a inversión en I+D+».

Revolución digital.

«Hay que revisar el paquete fiscal. Es una carga que no nos permite invertir más para permitir que España sea 'número 1' en revolución digital», dijo el consejero delegado de Vodafone España, Antonio Colimbra, en el mismo congreso.

Disfraz. El presidente de BP España, Luis Aires, pide que si el Gobierno decide equiparar la fiscalidad del gasóleo a la de la gasolina no debería «disfrazarla» como medioambiental, ya que emite menos CO₂.

«ES DIFÍCIL QUE HAYA UN NUEVO ESTATUTO ESTA LEGISLATURA»

Sánchez parece haber renunciado a un nuevo Estatuto de los Trabajadores esta legislatura. Al menos, ésta es la conclusión que sacaron ayer los interlocutores sociales tras reunirse con el presidente del Gobierno y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en La Moncloa. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, explicó que la intención del Ejecutivo es empezar a negociar un nuevo Estatuto, aunque son conscientes, señaló, de que «difícilmente» podrá concluirse esta legislatura. «No es un tema de hoy para mañana», añadió su homólogo en UGT, Pepe Álvarez, «y convendría hacerlo con el máximo consenso posible».

En cualquier caso, los sindicatos quisieron dejar ayer claro que en ningún caso debatir sobre un nuevo Estatuto supone su renuncia a seguir exigiendo la derogación de la reforma laboral de 2012, ya que consideran que hay que revertir de forma urgente sus aspectos más dañinos. «No vamos a permitir que el Gobierno se comprometa sólo a

cambiar aquello en lo que haya acuerdo con la patronal porque eso es darle derecho de veto», advirtió Sordo, que recordó la necesidad de adoptar medidas con carácter inmediato.

Entre ellas, aquellas que permitan poner coto a la subcontratación como la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, o la eliminación de la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales, un objetivo que defiende también la ministra. De momento, el Gobierno ha remitido a los agentes sociales un plan con sus propuestas para reducir la temporalidad y la precariedad. Y está previsto que antes de que termine este mes, se reúna la mesa del diálogo social para tratar éste y otros asuntos como las pensiones, la formación, la lucha contra el fraude laboral, etc.

Asimismo, UGT y CCOO instaron al Ejecutivo a cambiar cuanto antes la Ley de Desindexación que limita las subidas salariales de los trabajadores subcontratados por las Administraciones a las fijadas en los Presupuestos para el sector público, de tal manera que puedan beneficiarse de las alzas salariales pactadas con la patronal. I. MUNERA

en ningún momento en la reunión habían utilizado la palabra «recha-zo» respecto a la creación de nuevas figuras positivas, aunque pidió estudiar el asunto con cuidado.

Más contundentes fueron la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) que agrupan a todo el sector bancario y emitieron un inusual comunicado conjunto de protesta contra los planes del Gobierno de aplicarles un impuesto especial. «Desde el Gobierno de España

se está valorando la creación de nuevos gravámenes sobre el sector financiero con el objetivo de incrementar los ingresos del Estado y, de este modo, financiar el déficit actual del sistema público de pensiones. Si bien los objetivos que se pretenden alcanzar con estas medidas se pueden compartir, la creación de nuevos gravámenes a la banca no constituye una solución adecuada, porque sería injusta y porque conllevaría efectos colaterales perjudiciales para la economía española en general».

Dan por hecho el impacto en el cliente: «Supondría un obstáculo al relevante papel que desempeña este sector en términos económicos y sociales, con especial incidencia en lo que hace a su contribución al empleo y al desarrollo de la actividad económica a través de la concesión del crédito».

Además, «no resulta en modo alguno razonable hacer recaer las necesidades de ingreso adicional del sistema de pensiones sobre un único sector empresarial», protestan.